

**Unidad de Acceso a la Información Pública del Órgano Judicial:** San Salvador, a las ocho horas con tres minutos del nueve de noviembre del dos mil veinte.

En fecha 06/11/2020, se recibió la solicitud de información con número de referencia 701-2020, presentada por la señora XXXXXXXXXXXX mediante la cual requirió en copia certificada:

“Fotocopia Certificada de la Sentencia pronunciada a las CATORCE HORAS DEL DIA DOCE DE AGOSTO DEL DOS MIL DIEZ, ANTE JUEZ SEGUNDO DE FAMILIA, EN SAN SALVADOR, en las Diligencias de Partida de Nacimiento Ineficaz promovidas por el señor XXXXXXXXXXXXXXXX, para ser presentadas en el Registro Nacional de las Personas Naturales, para obtener por primera vez SU Documento Unico de Identidad. QUISIMOS HACER LA SOLICITUD PERSONAL A NOMBRE DEL INTERESADO PERO EL SISTEMA NO LO PERMITE PORQUE NO TIENE NUMERO DE DUI DON XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” (sic).

***Considerando:***

1. El objeto de la Ley de Acceso a la Información Pública -en adelante LAIP-, según lo establecido en su art. 1 es el de “garantizar el derecho de acceso de toda persona a la información pública, a fin de contribuir con la transparencia de las actuaciones de las Instituciones del Estado”. Y, según el art. 4, letra a) de ese mismo cuerpo normativo, la información pública se rige por el principio de máxima publicidad, que exige que la información en poder de los entes obligados sea pública y su difusión sea irrestricta, salvo excepciones expresamente establecidas en la ley.

2. El art. 10 de la LAIP, establece el tipo de información que se considera oficiosa, o mejor dicho la que se debe dar a conocer al público sin necesidad de una solicitud de acceso, y el art. 13 de la misma ley, establece qué tipo información debe darse a conocer a todas las personas por parte del Órgano Judicial, y entre estas, en relación con la actividad judicial, se encuentran las sentencias definitivas e interlocutorias firmes con fuerza definitiva, la sistematización de la jurisprudencia, y las estadísticas de la gestión judicial.

3. Pese a todo ello, no toda solicitud de información puede ser evacuada, pues jurisprudencialmente se han construido límites para la obtención de la información por esta vía administrativa en los términos prescritos en la LAIP, haciéndose una distinción entre lo

que debe considerarse como información de índole administrativa y la de carácter jurisdiccional.

Al respecto, específicamente en la resolución interlocutoria del proceso de amparo con referencia 482-2011, de fecha 06/07/2015, la Sala de lo Constitucional de esta Corte establece que: "... la información jurisdiccional es todo dato que constate la existencia o realización de un acto que tiene efectos o consecuencias directas o indirectas en un proceso o procedimiento tramitado ante autoridades que ejercen jurisdicción, tales como fases del proceso, demandas, informes, audiencias, incidentes, recursos, decisiones, entre otros. Este tipo de información alude a los actos por medio de los cuales se inicia, impulsa y finaliza un proceso. Así las cosas, la idea de información administrativa resulta excluyente: será administrativa toda información que no sea jurisdiccional o que no tenga una conexión con los actos que producen consecuencias en los procesos o procedimientos judiciales, tales como el contenido de los libros administrativos, agendas de sesiones, estadísticas, número de referencia de proceso en trámite o fenecidos, etc. (...) el acceso a la información pública que facilita la LAIP únicamente alude al ámbito administrativo de los juzgados y tribunales, no al jurisdiccional, pues resulta factible obtener información sobre este último de conformidad con las reglas que rigen la materia correspondiente..." (sic).

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en la resolución emitida en el proceso de inconstitucionalidad con referencia 7-2006, del 20/08/2014, en la cual literalmente se dijo: "Esta resolución únicamente delimita los ámbitos competenciales que corresponden al Oficial de Información de la Corte Suprema de Justicia y los que atañen a esta Sala. En realidad, lo que se ha hecho es aclarar que la información administrativa que corresponda al Órgano Judicial deberá ser tramitada ante el primero, mientras que la información jurisdiccional ante los respectivos tribunales..." (sic).

B. En consonancia con lo antes relacionado, es preciso acotar que el Instituto de Acceso a la Información Pública por resolución con referencia NUE 160-A-2015 (MV), de fecha 17/05/2016, sostuvo que "...el art. 110 letra `f` de la LAIP reconoce la vigencia de todas aquellas normas contenidas en leyes procesales relativas al acceso de expedientes durante el período de su tramitación. En tal sentido, y en concordancia con lo resuelto por la Sala de lo Constitucional en la sentencia de inconstitucionalidad 7-2006 y 6-2012, de

interpretarse que el legislador deliberadamente estableció que el acceso a los expedientes relacionados con normas procesales se rige por éstas y no por lo dispuesto en la LAIP...”.

C. Con lo dicho, es preciso aclarar que si bien es cierto dentro de la información oficiosa del Órgano Judicial –es decir, aquella información que debe darse a conocer al público, sin necesidad de una solicitud directa-, se contempla en el art. 13 letra b de la LAIP “las sentencias definitivas e interlocutorias firmes con fuerza de definitiva”, este mandato legal se cumple a través del Portal del Centro de Documentación Judicial de la Corte Suprema de Justicia, en donde se publican *en versión pública* tales decisiones, es decir, eliminando los apellidos de los demandados y de los demandantes (en algunos casos sustituyendo los nombres y apellidos por sus letras iniciales), o cualquier otro dato personal que permita su individualización o crear perfiles de las personas relacionadas en las mismas, ello de conformidad con el art. 30 de la LAIP.

En otras palabras, es obligación de la Corte Suprema de Justicia poner a disposición del público las líneas y criterios judiciales expuestos en las sentencias y resoluciones interlocutorias firmes con fuerza de definitiva emitidas por los diferentes tribunales del país, pero ello no exime a este Órgano de Estado de la prohibición de difusión de datos personales contenidos en dichas decisiones (art. 33 LAIP) y, por tanto, el referido mandato de información oficiosa se cumple a través de la publicación de una versión pública de esos pronunciamientos judiciales, tal como puede corroborarse el siguiente enlace:

<http://www.jurisprudencia.gob.sv/DocumentosBoveda/D/1/2010-2019/2013/12/C7AB2.PDF>

Lo anterior se trae a colación por cuanto en el presente caso, la peticionaria está solicitando concretamente se le extienda copia certificada de una sentencia judicial para presentarla a un registro de personas, en el cual no le será admitida una copia simple en versión pública de la referida sentencia, sino que se requiere una certificación completa de la misma, por tanto, debe la ciudadana o el interesado avocarse ante el juez de la causa y requerir con base en las leyes de familia esta certificación, ya que esta Unidad de carece de competencia para tramitarla. Y es que, en el presente caso al requerir una certificación de una sentencia en los términos planteados –se insiste– son los jueces correspondientes los que deben determinar la entrega de la misma, ello de conformidad con las reglas procesales de acceso a los expedientes que sean aplicables de conformidad con el art. 110 letra f de la LAIP.

De manera que, conforme a los criterios sostenidos por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y el Instituto de Acceso a la Información Pública –citados en párrafos precedentes– se determina que la información solicitada respecto de una certificación de sentencia definitiva, es de carácter jurisdiccional que debe ser tramitada frente al Juez de la causa y, por tanto, escapa del ámbito de aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública. En consecuencia, no le compete al suscrito Oficial de Información Interino del Órgano Judicial tramitar la solicitud presentada.

Por tanto; con base en los razonamientos precedentes y los artículos 71 y 72 de la ley de Acceso a la Información Pública, se resuelve:

1) Declárase la incompetencia funcional del suscrito para tramitar la petición planteada en la solicitud de información 701-2020, consistente en: “Fotocopia Certificada de la Sentencia pronunciada a las CATORCE HORAS DEL DIA DOCE DE AGOSTO DEL DOS MIL DIEZ, ANTE JUEZ SEGUNDO DE FAMILIA, EN SAN SALVADOR, en las Diligencias de Partida de Nacimiento Ineficaz promovidas por el señor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” (sic), planteada por la señora XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en virtud que este requerimiento de información, por los argumentos antes expuesto constituye información de índole jurisdiccional, la cual debe ser tramitada ante la autoridad judicial correspondiente.

2) Notifíquese.

  
  
Lic. Giovanni Alberto Rosales Rosagni  
Oficial de Información Interino del Órgano Judicial

**NOTA:** La Unidad de Acceso a la Información Pública del Órgano Judicial ACLARA: que la presente es una copia de su original, a la cual le fueron eliminados ciertos elementos para la conversión en versión pública de conformidad con los artículos 30 y 24 letra c) de la Ley de Acceso a la Información Pública.